

Santiago, once de marzo de dos mil veinticuatro

Vistos:

Por sentencia de diez de octubre de dos mil veintitrés dictada por el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, en los autos RIT N° T-1589- 2021 se rechazó en todas sus partes la demanda interpuesta por la actora en contra de la Dirección de Servicio de Salud Metropolitano Central, condenándose en costas a la demandante en la suma de \$200.000.

Contra ese fallo, la parte demandante dedujo recurso de nulidad, fundado en la causal del artículo 477 del Código del Trabajo, por haberse vulnerado los derechos fundamentales del artículo 19 N° 2 y N° 3 inciso quinto de la Constitución Política de la República. En subsidio del citado motivo, denunció la configuración de la causal prevista en la letra b) del artículo 478 del código del ramo, señalando finalmente que subordinadamente, postula la hipótesis contemplada en la letra e) de la misma norma.

Declarado admisible el recurso se procedió a su vista, oportunidad en que alegaron los apoderados de ambas partes.

Considerando:

Primero: Que la recurrente luego de realizar una referencia a los antecedentes del proceso, deduce en primer la causal del artículo 477 del Código del Trabajo por haberse vulnerado los derechos fundamentales del artículo 19 N° 3 de la Constitución Política de la República.

Considera que el juez de instancia, sin entrar al fondo del conflicto jurídico “construye”, la preclusión de la acción, negando y anulando ilícitamente el acto de nombramiento de la actora, obstruyendo su derecho a la jurisdicción laboral y a un proceso racional y justo, en donde el debido proceso constituye una norma de eficacia de legalidad en sí mismo, que incluye la dictación de una sentencia motivada.



Al efecto, refiere que en el considerando décimo tercero se priva a la actora del acceso a jurisdicción específica del trabajo y del procedimiento tutelar, de rango constitucional, mediante la negación de su estatus de trabajador, por haberse desempeñado la demandante en calidad de contrata, y siendo su cargo, en consecuencia, un empleo público, regido por el Estatuto Administrativo.

Arguye que además se contravino el derecho público y el principio de juridicidad, en atención a que el servicio ambulatorio es incompetente para renovar cargos y la mera asignación de tareas, por lo que revocó ilegalmente un acto de nombramiento para lo que no se encuentra habilitado, siendo evidente el vicio de desviación de fines, por actuación inválida al revocar un acto de designación del cargo dispuesto por ley a la institución denunciada, sin investidura, sin competencia y sin el respeto irrestricto del principio de juridicidad, contraviniendo el ordenamiento jurídico, atentando contra la jerarquía normativa.

Agrega que por otra parte que la Resolución Exenta N° 735, de 2019 dictada por el SAMU a través de la cual se dispuso la no renovación de su contrata, carecería de valor probatorio, ya que no se dictó a través del sistema SIAPER de Contraloría, sino que se la emite por fuera del sistema, estampando un timbre de Registro que no es un control legal, todo indiciario de su obtención por medios ilícitos.

Como segundo fundamento de la causal, dispone que se infringieron también los derechos consagrados en el artículo 19 N°2 y N° 3 de la Constitución Política de la República, que garantizan la igualdad ante la ley y la igual protección de la ley en ejercicio de los derechos.

En este sentido, indica que el razonamiento décimo tercero vulnera dichos derechos al negar la legitimación de acceso a la tutela laboral, anulando el estatus de trabajadora de la recurrente.



Reclama que el tribunal de instancia se abstiene de ejercer su rol jurisdiccional de rango constitucional, produciendo la nulidad, evadiendo la resolución del conflicto de fondo y, que por disposición expresa del artículo 1 de la Ley N° 21.280 aplica a los trabajadores que desempeñen sus funciones en los órganos referidos en el mismo artículo.

Detalla que la sentencia pronunciada en sede protección no produce cosa juzgada y que resulta evidente la imposibilidad de que la destitución antijurídica que se alega en esta causa hubiera sido materia contenida en el proceso de protección Rol N° 4159-2019, pues éste fue presentado en enero del año 2019 y resuelto en sentencia de fecha 06 de agosto de 2019, época en la que no se había producido la destitución antijurídica que se denuncia que implica la vulneración de su derecho de indemnidad.

Como tercer fundamento de la causal, esgrime que el juez del grado, establece la preclusión por consumación de la acción de tutela laboral, mediante la identidad legal antijurídica de actos administrativos no homologables, que establece mediante la incorrecta administración de justicia fundado en la apreciación arbitraria de sentencias externas a la causa, que no producen cosa juzgada y que el juez interpreta erradamente como una carta blanca para la no renovación de la designación del cargo en la institución pública denunciada, que vulneran su derecho de indemnidad respecto del acto administrativo de su nombramiento.

Además, señala que la sentencia ha sido dictada con infracción sustancial de derechos o garantías constitucionales e infracción de las reglas procesales en la dictación de sentencia, errónea apreciación y valoración de las pruebas, que contempla el procedimiento de tutela laboral, vulnerando el derecho de la actora en su calidad de funcionaria pública con un cargo a contrata al acceso efectivo a la tutela judicial y a la función supletoria del código laboral y el derecho a tutela laboral por vulneración de sus derechos fundamentales en contexto de la relación laboral con la institución estatal, como es el caso.



Refiere que, de no haberse producido las infracciones de garantías constitucionales alegadas como causales del presente recurso, se habría arribado necesariamente en el fallo a la conclusión de acoger totalmente la demanda formulada por su representada, en contra de la denunciada institución pública Dirección de Servicio de Salud Metropolitano Central, tanto la principal como la subsidiaria.

Segundo: Que, en subsidio de la causal anterior, interpone la causal establecida en el artículo 478 letra b) del Código del Trabajo, replicando los argumentos señalados precedentemente.

Al efecto refiere que el considerando undécimo infringe el principio de razón suficiente evadiendo el reconocimiento de los actos de nombramiento, construyendo una falsa preclusión, dando carta blanca para una destitución antijurídica, violando sus derechos de indemnidad, falacia que sostiene en la preclusión, apelando inapropiadamente a sentencias judiciales ninguna de las cuales ha sometido a jurisdicción la destitución antijurídica, siendo los fundamentos los mismos que la tesis falsa, como que existe la preclusión porque el Tribunal laboral ya dijo que una asignación de tareas no era arbitraria, que cursa el juez de fondo como una desafectación improcedente del cargo público, en circunstancias que para que pueda ser posible el ejercicio de un trabajo requiere de un contrato o al caso una designación del cargo, que se encuentra ligado a la institución de origen, sin ejercer la jurisdicción respecto de sus derechos de indemnidad.

Asimismo, considera que se infringe el principio de la lógica en atención a que correspondía incluirla en la Resolución Exenta N° 5926 de 31 de diciembre de 2019, sobre renovaciones de contrato del año 2020, cuya ilegalidad de no inclusión de la denunciante se reclamó mediante reclamo por vicios de ilegalidad Folio R-405 presentado 18 de marzo de 2020, sobre su impugnación ante el órgano contralor competente, pendiente de resolución a la fecha, puesto que se abstuvo



inconstitucionalmente de resolverlo (N° 20, de la prueba documental) no apreciada en su mérito, en tanto de su sola comparación con el anterior acto de designación del cargo, Resolución Exenta N° 6031, de 24 de diciembre de 2018, sobre renovación de su vínculo funcionario del año 2019, consta que la única funcionaria de las que se identifican en dicho acto de designación el cargo del año 2019 que fue excluida del acto administrativo, fue su representada, lo que además de adolecer de vicios de ilegalidad, que el órgano Contralor se ha negado a fiscalizar y controlar, vulnera sus derechos de indemnidad, en los términos denunciados en los autos, pues constituye una destitución antijurídica encubierta y conlleva actuaciones al margen de la ley.

Refiere que no podrían haber sido apreciadas por el tribunal las pruebas obtenidas directamente por medios ilícitos y a través de actos de la denunciada y del SAMU, que implican violación de derechos fundamentales de su representada, careciendo de valor probatorio las liquidaciones de sueldo y los cheques que giró el SAMU, que constan en el numeral 3 y 14 de las pruebas incorporadas en la audiencia de juicio, con los que supuestamente habría pagado las remuneraciones de todo el año 2019, que como expuso no cuentan con respaldo legal, ni de designación del cargo ni de acto administrativo de autorización de ausentismo por licencias médicas, emitiendo cheques y liquidaciones de sueldo, y resolución de no renovación, obtenidas directamente por medios ilícitos sin respaldo de contrato, todo por fuera de los sistemas de control legal, como son el Sistema de Información y Control del Personal de la Administración del Estado, (SIAPER) de Contraloría, y el Sistema de Información de Recursos Humanos (SIRH), en los que se registra el acto de designación del cargo, asociado al órgano denunciado creado para el cumplimiento de la función administrativa, en este caso de gestor de la red asistencial de salud.



Finaliza señalando que, la falta de sometimiento a las reglas de sana crítica, tiene influencia de la infracción en lo dispositivo del fallo, por cuanto, no puede, ser razón suficiente las justificaciones vertidas en su sentencia, sin sustento de razones jurídicas ni técnicas.

Tercero: Que, en subsidio de las causales anteriores, la recurrente deduce recurso de nulidad por la causal del artículo 478 letra e) en relación con lo establecido en los numerales 4, 5 y 6 del artículo 459 del Código del Trabajo.

Respecto a esta causal refiere que las pruebas aportadas al proceso que no fueron valoradas por el sentenciador, refiere que no se apreció en su mérito ni en los vicios de ilegalidad el documento consistente en la Resolución Exenta N° 5926 de 31 de diciembre de 2019. Reitera lo ya señalado en cuanto a que dicha resolución fue dictada por fuera del sistema SIAPER, por lo que a su criterio sería ilegal.

Con todo expresa, el sentenciador no expresa ningún el razonamiento jurídico ni lógico, que conduce a esta estimación, obviando mediante una apreciación sesgada de las pruebas, la aplicación de los preceptos constitucionales, legales o los contenidos en tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, las consideraciones jurídicas y los principios de derecho o de equidad en que el fallo se funda.

De igual forma acusa que se arribaron al proceso diversos documentos que no fueron apreciados en su mérito.

Concluye que las infracciones y vicios mencionados precedentemente influyen en lo dispositivo del fallo, toda vez que si la sentenciadora hubiera analizado toda la prueba rendida, enunciado que lo ha conducido a estimar los hechos como probados y su razonamiento, habría rechazado la demanda formulada.



Cuarto: Que el recurso de nulidad laboral tiene por objeto, según sea la causal invocada, asegurar el respeto a las garantías y derechos fundamentales, o bien, conseguir sentencias ajustadas a la ley, como se desprende de los artículos 477 y 478 del Código del Trabajo, todo lo cual evidencia su carácter extraordinario que se manifiesta por la excepcionalidad de los presupuestos que configuran cada una de las referidas causales en atención al fin perseguido por ellas, situación que igualmente determina un ámbito restringido de revisión por parte de los tribunales superiores y que, como contrapartida, impone al recurrente la obligación de precisar con rigurosidad los fundamentos de aquellas que invoca, como, asimismo, de las peticiones que efectúa. Igualmente, cabe tener presente que el recurso de nulidad no constituye una instancia, de manera que estos sentenciadores no pueden ni deben revisar los hechos que conforman el conflicto jurídico de que se trata, siendo la apreciación y establecimiento de éstos una facultad exclusiva y excluyente del juez que conoció del respectivo juicio, y, asimismo, a esta Corte le está vedado efectuar una valoración de la prueba rendida ante el Juzgado del Trabajo, lo que corresponde únicamente a éste, el cual está dotado de plena libertad para ello, con la sola limitación de no contrariar los principios de la lógica, las máximas de experiencia y los conocimientos científicamente afianzados. El recurso de nulidad, finalmente, es un arbitrio de derecho estricto que requiere claridad y precisión en su fundamentación lo que resulta necesario toda vez que aquello da y define la competencia del Tribunal superior, el que no puede acogerlo por otros motivos, salvo la situación contemplada en el inciso final del artículo 479 del Código del Trabajo.

Quinto: Que, en consecuencia, el recurso de nulidad es un arbitrio de carácter extraordinario y de derecho estricto y solo procede por las causales que expresamente se prevé en los artículos 477 y 478 del Código del Trabajo.



En cuanto a la causal prevista en el artículo 477 del Código del Trabajo:

Sexto: Que de acuerdo a lo expresado en el libelo, el recurso se funda en la presunta infracción cometida en la sentencia del derecho de la recurrente a la jurisdicción laboral, a un procedimiento racional y justo, anulando su estatus de trabajadora por desempeñarse a contrata, agregando como fundamentos del motivo argumentos que darían cuenta del error cometido por el juez al atribuir incidencia en la decisión de lo debatido a sentencias dictadas en otras sedes, denunciado también vulneración del principio de juricidad y acusando que se eludió resolver el fondo de la cuestión propuesta.

Séptimo. Que, sin embargo, tales afirmaciones se desentienden de lo expresado por el tribunal en el motivo Octavo de la sentencia atacada, en el que se declara que a la actora, en cuanto funcionaria del Servicio de Salud Metropolitano Central desde el 13 de septiembre de 1994, en calidad de contrata, le resultan aplicables las normas de tutela de derechos fundamentales por aplicación directa del artículo 1°, inciso 3° del Código del Trabajo, al no encontrarse establecido ni regulado un procedimiento de tutela laboral en estatuto que la rige.

Octavo. Que una cuestión diversa es, en todo caso, que el tribunal, haciéndose cargo del debate ventilado en la instancia, haya resuelto acoger alegaciones de la demandada, declarando la preclusión del derecho de la trabajadora en virtud de las motivaciones expresadas en los fundamentos Noveno y Décimo, o desestimar la acción subsidiaria de acuerdo a lo señalado en el considerando 13°, con las cuales podrá legítimamente disentir y reconducir tal discrepancia a las hipótesis de nulidad que, al efecto, prevé el ordenamiento jurídico.

Tal decisión no constituye, en modo alguno, una vulneración a las garantías constitucionales indicadas en el libelo, sino que es uno de los



resultados posibles del ejercicio de la jurisdicción, sin que pueda adjudicarse la frustración de la acción - después de un procedimiento íntegramente tramitado, de acuerdo al orden consecutivo legal previsto con antelación, y en el que la demandante contó con defensa letrada - a una conculcación de los derechos y garantías previstos en la Constitución Política de la República, constituyendo, por el contrario, una manifestación del ejercicio de los mismos, con independencia de su resultado.

Noveno: De esta manera, el recurso en los términos planteados no podrá prosperar, por no constituir los hechos propuestos, el motivo alegado.

En cuanto a la causal principal prevista en el artículo 478 letra b) del Código del Trabajo:

Décimo: Que, el artículo 456 del Código del Trabajo establece que:
“El tribunal apreciará la prueba conforme a las reglas de la sana crítica.

Al hacerlo, el tribunal deberá expresar las razones jurídicas y las simplemente lógicas, científicas, técnicas o de experiencia, en cuya virtud les asigne valor o las desestime. En general, tomará en especial consideración la multiplicidad, gravedad, precisión, concordancia y conexión de las pruebas o antecedentes del proceso que utilice, de manera que el examen conduzca lógicamente a la conclusión que convence al sentenciador.”

De este modo por medio de la causal invocada lo que corresponde es determinar si en su sentencia el tribunal ha vulnerado en forma manifiesta, esto es, de manera evidente y notoria las reglas indicadas en el artículo 456 ya citado, puesto que, de no ser así, si no existe vulneración de los principios y reglas que éste señala, el juez ha sido soberano para apreciar la prueba rendida en la causa y esta Corte no puede entrar a ponderar el hecho establecido sin riesgo de vulnerar gravemente el principio de la inmediación.



Además de ello la causal exige que en el recurso se indique qué reglas de la sana crítica se encuentran infringidas y cómo se produce esa trasgresión.

Undécimo: Que, la impugnación por esta causal dice relación con el entendimiento de la existencia de un vicio producido en el razonamiento probatorio del tribunal, por cuanto según el recurso el tribunal habría infringido -en dicho proceso mental para fundar su convicción condenatoria- los principios lógicos de razón suficiente y de no contradicción.

Duodécimo: Que, el principio de razón suficiente fue formulado por Wilhelm Leibniz, quien lo habría elaborado para explicar el fundamento de las *“verdades contingentes”*. Surge la necesidad de diferenciar entre el principio ontológico, según el cual *“tanto el ser, como el acontecer, tiene su razón suficiente”*, del principio lógico, para el cual *“Todo juicio, para ser verdadero, ha menester una razón suficiente”*.

“Por ello, hay que ser cuidadosos en su aplicación y limitarse a exigir una ‘mínima actividad probatoria’ que pueda bastar para fundamentar la verdad de un enunciado. No se debe exigir una fundamentación completa que cumpla los más altos estándares de prueba (‘máxima actividad probatoria’), pues con ello nos apartaríamos del principio lógico para adentrarnos en los dominios del principio epistemológico y ontológico de razón suficiente” (Sana crítica, Javier Maturana Baeza, Thomson Reuters, Santiago, 2014, p. 247 y 250).

En efecto, nuestros razonamientos están fundados sobre dos grandes principios: el de contradicción, en virtud del cual juzgamos falso lo que implica contradicción, y verdadero lo que es opuesto o contradictorio a lo falso y el de razón suficiente, en virtud del cual consideramos que no podría hallarse ningún hecho verdadero o existente, ni ninguna



enunciación verdadera, sin que haya una razón suficiente para que sea así y no de otro modo.

El principio de razón suficiente nos da respuesta a una exigencia natural de nuestra razón, según la cual nada puede ser "porque sí", pues todo obedece a una razón. En suma, el principio de razón suficiente nos dice: "todo tiene una razón de ser". Por su parte, don Nelson Pozo Silva, en el texto *Razonamiento Judicial*, (Librotecnia, Santiago, 2009, p. 273), sin perjuicio de lo señalado, sistematiza este principio del buen razonar dentro de los principios ontológicos, llegando a la máxima de que todo "*conocimiento debe estar suficientemente fundado*". Y cuando cita a Schopenhauer, a propósito de su cuádruple raíz del principio de razón suficiente, uno de esos vértices lo menciona como la "*relación lógica que concatena los juicios del entendimiento*". De manera que, en el proceso intelectual de los jueces durante el razonamiento probatorio, este principio se transforma en una suerte de guía objetiva que lleva al tribunal en su fundamentación desde la prueba rendida a las conclusiones a las que llega producto de las mismas.

Décimo tercero: En este caso, el proceso mental del juez para arribar a la convicción contenida en la sentencia recurrida se afina en la valoración que se efectúa de dicha prueba, a juicio del recurrente, sin respetar el señalado principio de razón suficiente, al punto que en su concepto la única solución posible sería rechazar la demanda que al efecto se hubiere deducido.

Décimo cuarto: Que al efecto del análisis de la sentencia recurrida se ha identificado por parte del sentenciador los hechos cuya existencia ha tenido por demostrada; los datos externos con que se probaron dichos presupuestos fácticos y la forma en que se acreditaron suficientemente, de manera unívoca.



Décimo quinto: Que, en este sentido, si toda *afirmación o proposición que acredite la existencia o no de un hecho debe estar fundamentada en una razón que la acredite suficientemente*, se ha cumplido en la especie, toda vez que la valoraciones de los testigos de las partes y de la documental que fuere incorporada al efecto bajo el cumplimiento y fundamentación en los términos que preceden, aparece provisto de elementos de credibilidad de sus testimonios que se afincan en los parámetros precisados con antelación, divisándose razones suficientes para desestimar la acreditación de lo pretendido por el demandante, por lo que no se comparte este argumento invalidatorio sostenido por el recurrente.

Décimo sexto: Que, en cuanto al principio de no contradicción, de conformidad a la doctrina expresada por la Corte Suprema para estar en presencia de una infracción a la citada directriz, se requiere que el impugnante:

1° Identifique las proposiciones fácticas que se refieren a escenarios idénticos contenidas en la sentencia.

2° Señale las conclusiones afincadas en una sola de las proposiciones contradictorias, sin embargo, a que llega el tribunal.

Es claramente, en consecuencia, un tema que dice relación con lo argumentado por el tribunal en su sentencia que conduce a la invalidación de su razonamiento, no tratándose de un problema respecto a discrepancias entre la valoración efectuada por el tribunal y la planteada por la defensa, argumento suficiente para desechar también este motivo absoluto de nulidad.

Décimo séptimo: Que los razonamientos contenidos en la sentencia impugnada, independientemente si fueran compartidos o no por el recurrente, constituyen reflexiones idóneas que permite entender dentro de la lógica, la convicción del juez cuyas conclusiones no desbordan los



márgenes entregados por la ley y especialmente las máximas de experiencia, la lógica y los principios científicamente afianzados. La decisión demuestra razón suficiente que no contiene imperfecciones y por lo mismo no es posible generar una nueva prueba para desvirtuar la convicción a la que arribó el magistrado que estuvo presente en la discusión, rendición y observaciones de las acreditaciones que efectuaron los intervinientes sea para demostrar sus respectivas teorías del caso.

Décimo octavo: Que, por su parte, para el análisis de esta causal dado que se trata de un vicio formal exige que la infracción de las reglas de valoración de la prueba sea “manifiesta”, esto es, evidente, ostensible, indudable, lo que obviamente no se extiende al caso en que la ponderación de los medios de prueba no corresponda a la apreciación particular que el interesado hace de los mismos.

Décimo noveno: Que sin embargo, en el presente caso, el fallo recurrido contiene la relación y análisis de los medios de prueba aportados al juicio, sin que se aprecie por esta Corte en el razonamiento del sentenciador contenido en los basamentos octavo a undécimo y décimo alguna vulneración a las reglas de valoración de la prueba, ninguna infracción “**manifiesta**” de alguna regla de la sana crítica, ni de algún principio de la lógica, ni de las máximas de la experiencia, expresándose claramente en el mismo las razones en atención a las cuales el juez del grado concluye del modo que es reprochado por el demandado mediante el presente recurso.

Vigésimo: Que, por lo señalado, la nulidad intentada debe desecharse, pues el vicio formal consiste en razonar de una forma distinta a la que permite el citado artículo 456 del Código del Trabajo, y no se extiende al caso en que la valoración de los medios de prueba no corresponda a la percepción que el reclamante hace de los mismos o aborde aspectos que no guardan relación con el núcleo de lo debatido, como se ha expresado en el basamento precedente.



Vigésimo primero: Que, esta Corte observa que el recurrente en el desarrollo de su arbitrio, no cumple con dejar en evidencia como se produce la vulneración que alega a los principios de la sana crítica que señala, tampoco refiere el carácter de manifiesto de la supuesta infracción. En efecto, dirige su argumentación a establecer una falta o infracción a los principios de identidad, de no contradicción y de la razón suficiente en las conclusiones del tribunal, sin embargo, la estructura argumentativa de la sentencia en las motivaciones antes precisadas que se revisa es suficientemente clara para entender sus conclusiones, lo que queda por lo demás en evidencia en los hechos que da por establecidos, distinto es que la recurrente se detenga en ciertos pasajes de los considerandos que transcribe, y no en aquellos que contradicen su tesis.

Vigésimo segundo: Que, así las cosas, no es posible a esta Corte concluir vulneración alguna a las reglas de la lógica o máximas de la experiencia, al menos de una manera manifiesta, por lo cual se desestima la causal, por falta de fundamento y por ende el recurso de nulidad en relación a este acápite.

En cuanto a la causal prevista en el artículo 478 letra e) del Código del Trabajo:

Vigésimo tercero: Que en relación a este acápite se denuncia la omisión de los requisitos contemplados en el artículo 459 N° 4, 5 y 6 del Código del Trabajo, porque en la sentencia no existiría el razonamiento que lleva a estimar probados los hechos en el fallo.

Vigésimo cuarto: Con relación a este capítulo del recurso cabe poner en relieve su carácter particularmente infundado, porque en este punto el libelo carece de argumentación. El recurrente se limita a transcribir el texto del artículo 478 letra e) del Código del Trabajo y señalar la supuesta prueba que no habría sido valorada por el sentenciador, sin desarrollar a su respecto la forma en que dicha eventual omisión hubiere influido en lo dispositivo del fallo.



En efecto, como toda nulidad, este arbitrio responde al imperativo de la relevancia, en el sentido que no basta la verificación de un vicio para disponer la invalidación de un fallo. Esto que se dice está expresado en el mismo artículo 478 del Código del Trabajo, cuando se indica que “*No producirán nulidad aquellos defectos que no influyan en lo dispositivo del fallo (...)*”; y se traduce en que la labor del recurrente no se agota en la sindicación del vicio sino que comprende también el deber de demostrar cómo aquél se produce y la incidencia que el mismo tendría en la decisión.

Vigésimo quinto: Que además en relación a este capítulo el presente arbitrio tampoco podrá prosperar.

Por las razones anteriores, más lo dispuesto en los artículos 477, 478 letra b) y 478 letra e) del Código del Trabajo, se **rechaza, sin costas**, el recurso de nulidad deducido por la actora contra la sentencia de diez de octubre de dos mil veintitrés dictada por el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, en la causa RIT T – 1589- 2021, sentencia que, en consecuencia, no es nula.

Redacción de la ministra Graciela Gómez Quitral.

Regístrese y comuníquese.

Laboral-Cobranza N° 3739-223





Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: HQSDXMRGDJG

Pronunciado por la Duodécima Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Graciela Gomez Q., Veronica Cecilia Sabaj E. y Ministro Suplente Sergio Guillermo Cordova A. Santiago, once de marzo de dos mil veinticuatro.

En Santiago, a once de marzo de dos mil veinticuatro, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: HQSDXMRGDJG